



RECENSIONES

Daniel A. González Madrid y Manuel Ortiz Heras (coords.), *El Estado del bienestar entre el franquismo y la Transición*, Madrid, Sílex, 2020, 387 páginas, por Antonio Cazorla (Trent University)

DOI: <https://doi.org/10.20318/hn.2021.5906>

Es posible que el mayor obstáculo para entender el franquismo sea nuestra normalidad actual. A pesar de los evidentes y graves problemas de la sociedad española en el nuevo milenio, esta se encuentra radicalmente distanciada de su realidad bajo el franquismo. La libertad, tolerancia, riqueza, posibilidades, servicios, etc., que tenemos desde hace tiempo pueden parecer la normalidad natural y, por ello mismo, hacer inconcebible un pasado no tan lejano en el que la represión, la intolerancia, la negación de un futuro mejor, la miseria social intensa y extensa, etc. eran lo cotidiano. Es posible que el auge reciente de la ultraderecha en España tenga, al menos en parte, sus raíces en la incapacidad de concebir ese pasado horrible de nuestro país, al que medios interesados hoy banalizan como si se tratase de una versión sobria pero no tan distinta y hasta más auténtica del presente. Por ello no es de extrañar que a los que quieren que nada cambie o incluso que vayamos hacia atrás en mucho de lo que hemos progresado les interese la ignorancia histórica, y que el público, sobre todo el más joven, no sepa lo que está en peligro y lo que se puede perder otra vez. Pensemos por ejemplo en quiénes han venido minando durante años la sanidad pública presentando lo que ellos llaman con cinismo “externalización”, como la panacea para reducir gastos que luego resulta que solo aumentan la factura final que pagamos todos, o los que han hecho lo mismo al abrigo de un “proyecto de país” distinto y mejor que el de la presunta saqueadora España.

Por todo lo anterior es necesario que salgan a la luz libros como el que han coordinado Daniel González Madrid y Manuel Ortiz Heras; aunque sigue siendo imperativo que investigaciones como esta no se queden solo en el ámbito académico y que sirvan para educar a los ciudadanos. Pero de esto último hablaremos en otro lugar y en otro momento. Hoy lo importante es lo que han hecho los distintos autores de este volumen para desmontar un mito que no solo resiste sino que hasta es reciclado constantemente: el de la supuesta deuda de la sociedad

española a Franco por haber creado y habernos legado el Estado del bienestar que tenemos hoy en día. Como este libro demuestra en detalle y con precisión se trata tanto de una falacia como, lo que es aún peor, de una banalización del sufrimiento de nuestros padres y abuelos.

El franquismo nació para impedir la redistribución de la riqueza y para ello necesitaba no solo que los pobres siguiesen siéndolo sino incluso fuesen explotados hasta morir de hambre y enfermedades. Pero, fiel a su ideología fascista e integrista católica, necesitaba justificarse a sí mismo y ante la conciencia de quienes le apoyaban, ofreciendo un modelo socio-económico distinto, y supuestamente superior, al liberal. Mucho de razón tenían los fascistas cuando criticaban el modelo liberal de antes de la segunda guerra mundial, pero lo que ellos ofrecían no era mejor y conllevaba el peso de las cadenas y del miedo. Y desde luego, cuando el capitalismo se reinventa con el pacto social de postguerra, la retórica fascista ya estaba totalmente desacreditada, salvo en la no liberada España que debió seguir gobernada bajo la patraña corrupta e inepta treinta años más.

Como cuenta Luis Moreno en su capítulo, cuando en 1936 el golpe militar abortó las reformas republicanas, se llevó consigo el proyecto del Gobierno de crear un seguro unificado (22). Habría que, como nos recuerda Joaquín Aparicio Tovar, esperar hasta la llegada de la democracia (49) para que dicho plan se llevase a cabo. ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, porque el Nuevo Estado no estaba dispuesto a hacer que sus partidarios más ricos pagasen impuestos, en especial de la renta, con lo cual los presupuestos generales nunca tuvieron partidas para seguros médicos, vejez, invalidez, etc., que se asomasen ni siquiera de lejos a las necesidades sociales. La segunda razón es que el Estado se convirtió en parte del botín de los vencedores, y esa pandilla de chulos inútiles (son palabras de Franco, no mías) que eran los falangistas se quedaron con el pastel sindical y con buena parte del asistencial, creando duplicidades absurdas (Margarita Vilar, 129). Esta multiplicidad y redundancia de servicios floreció en el mundo asistencial al lado de un amplio sector privado que exigía su parte en el reparto de los beneficios de la miseria ajena.

El Estado de ínfulas totalitarias fue incapaz, por las razones arriba apuntadas, de cubrir las necesidades de la población. Como recuerda Daniel Lanero en su magnífico capítulo, fuera de la previsión social se dejó nada más y nada menos que a la población agraria -pese a que el seguro médico para este sector supuestamente fue creado en 1943- que en la postguerra era la mayoría de la española. Solo a partir de 1967, de forma muy parcial e incompleta, se comenzó a

remediar esta escandalosa situación (75-79). Por eso, aun en los años setenta teníamos a los campesinos españoles contratando de su bolsillo “iguales” (¿qué será eso?, dirán los más jóvenes) como habían hecho sus antepasados casi un siglo antes para que un médico privado les viese; y eso que médicos en el campo había pocos, apenas el 13% del total (Ortiz Heras, 157-198). Los hábitos de la humillación mueren despacio. Todavía en los años noventa, una amiga médica de quien esto escribe se sorprendió cuando, durante una sustitución en un pueblo de Almería, los pacientes, de forma sistemática, le dejaban unas cien pesetas de media sobre su despacho al salir... Es de suponer que el titular de la plaza ganaba algo más que lo que su nómina decía y que para este señor la sanidad pública era una forma de beneficencia. En esto último andaba en sintonía en lo que ya se llamaba el régimen anterior.

Pero ni siquiera los obreros recibieron lo que la Revolución Nacional-Sindicalista decía que les estaba dando. Cuando se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) en 1944, el Estado se lavó las manos y forzó a que fuesen los asegurados y los patronos quienes lo financiasen. En medio de la miseria de la postguerra y del que si no te gusta te la tragas y callas o te vas, el fraude floreció y el seguro de enfermedad no acabó de despegar. En 1965, solo el 55% de la población tenía algún tipo de cobertura sanitaria, y cuando Franco expiró en La Paz en 1975 todavía cerca del 20% de los españoles carecían de dicha cobertura (Damián González Madrid, 199-200). Los médicos, por su parte, como nos recuerdan Enrique Perdiguero y Eduardo Bueno, pusieron el grito en el cielo, no porque la gente se moría sin seguro sino porque les quitaban el negocio (96, 110-111, 116). Pero es que además, el Estado en vez de dar a veces quitaba. Como explica Margarita Vilar (152) cuando la Seguridad Social experimentó notables superávits entre 1972 y 1975, ese dinero fue a financiar a quienes lo guardaban (bancos) o a otras inversiones... como si no les hiciese falta a los pobres.

La desinversión, el caos y la incompetencia pesaron gravemente en las infraestructuras. Como narran Josep Barceló y Josep Comelles, Barcelona, la gran urbe industrial española - donde el SOE debería tener su mejor ejemplo para ayudar a captar a las masas obreras- no tuvo un hospital de esta organización hasta 1955 (240). Si esto pasaba en la España rica, el panorama en la España pobre y rural era simplemente desolador: todavía en 1977 solo el 4% de pueblos españoles tenía ambulatorio (González Madrid, 221). Los más débiles pagaron la cuenta final, y entre los más necesitados de ellos estaban los discapacitados. Este es el balance que hacen Mercedes del Cura y Salvador Cayuela: “El número de medidas fue ciertamente importante pero

lo cierto es que no tuvieron ningún efecto en las personas con discapacidad” (262). Legislar y hacer brindis al sol en una dictadura suele salir gratis.

Recordemos que este desastre y el caos que lo envolvió y conformó tuvo lugar mientras en Europa Occidental se estaba construyendo un Estado del bienestar auténtico basado en los derechos de los ciudadanos y no en las concesiones caritativas del Estado. He aquí otra diferencia entre una sociedad libre y otra subyugada. Por eso llama la atención que -salvo unas interesantes cifras generales que aporta González Madrid- no haya en este libro un capítulo dedicado a comparar la evolución del Estado del bienestar español con los de los países de su entorno. Dicho de otro modo: no ayuda a desenmascarar los mitos franquistas que se ignore la realidad coetánea de países libres y prósperos. La historiografía española sigue siendo demasiado insular y, en este caso, se podría haber hecho un esfuerzo para buscar a un especialista, español o no, que pusiese luz y perspectiva a algunas de las realidades y debates que aparecen en el libro. A lo mejor descubrimos tanto diferencias como similitudes que no sospechamos y, por lo tanto, nuevas formas de enfocar el tema. Este es, con mucho, el defecto mayor de este excelente y necesario volumen. Otro defecto, menor, es que un par de capítulos – más allá de su innegable calidad- tienen una conexión más bien circunstancial y poco relevante al tema tratado. Los editores deberían haber sido algo más rigurosos en este aspecto.